

Antecedentes históricos de las elecciones en Nicaragua

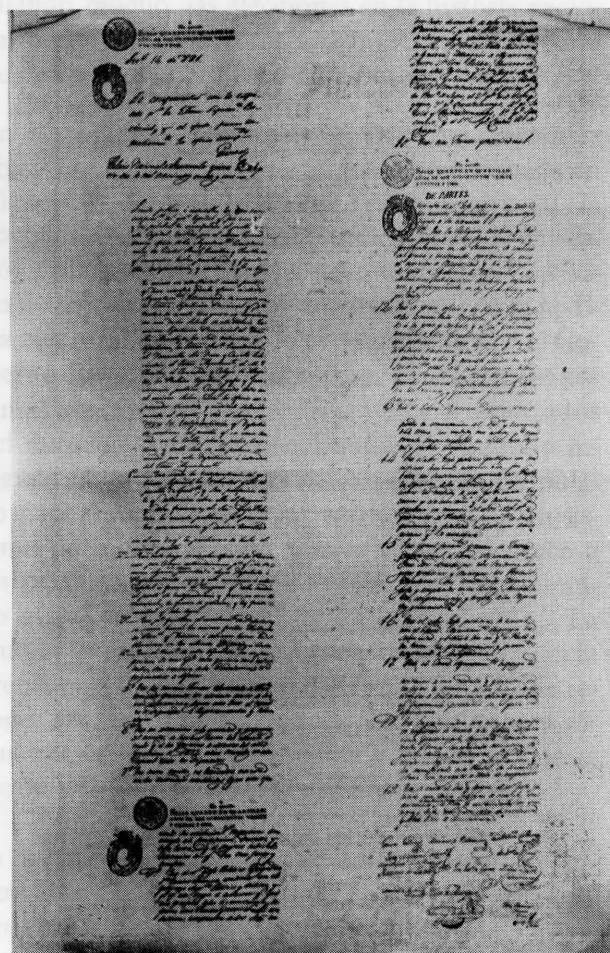
RAFAEL CHAMORRO

Ex-Presidente del Tribunal de Apelaciones, Decano de la Facultad de Derecho
y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Centroamericana (UCA).

Este trabajo tiene como objetivo principal describir los aspectos histórico-jurídicos de las elecciones en Nicaragua. Para facilitar su comprensión hemos dividido la historia de las elecciones en dos grandes períodos: un primer período comprendido desde la independencia hasta la revolución de Zelaya (1821–1893) y un segundo período que abarca desde la caída de Zelaya hasta nuestros días.

En relación a las elecciones, podemos afirmar que la primera ley electoral que tuvo Centroamérica fue la misma Acta de Independencia. En ella se disponía la elección de los representantes al congreso por medio de Juntas Electorales de Provincia. Se establecía, además, que dichas juntas determinarían el número de representantes a elegir sobre la base de un representante por cada quince mil habitantes. De igual forma, quedaba estipulado que las elecciones debían realizarse en un tiempo prudencial a fin de que ello permitiera a los representantes integrar el congreso en la ciudad de Guatemala el primero de marzo de 1822.

Desde la Constitución Federal de Centroamérica (1838) hasta la finalización del período de los Treinta Años, las elecciones se realizaban a través del sistema de sufragio indirecto. Los organismos electorales de esa época se conformaban por Juntas Populares integradas con un mínimo de tres



Facsimil del Acta de la Independencia de 1821.
Foto: Adrian Look.

cientos treinta ciudadanos inscritos y un máximo de tres mil trescientos. Estas Juntas Populares designaban a los electores, en la proporción de uno por cada trescientos treinta habitantes inscritos, que conformarían las Juntas de Distrito. Estas, eran las que elegían al Director Supremo, que después se llamó Presidente de la república. Otro de sus atributos era nombrar a los diputados y a los electores que formaban parte de las Juntas de Departamento. Estas se encargaban de elegir a los senadores.

Así, las elecciones del presidente se realizaba mediante lo que podríamos llamar una elección de dos grados. Las Juntas Populares nombraban a electores que eran los que elegían al presidente y a los diputados. La elección de senadores era de tercer grado, pues las Juntas Populares nombraban electores los cuales a su vez designaban a otros electores para que éstos eligieran a los senadores.

Desde la Constitución Federal hasta la finalización del período de los Treinta Años, se establecía como requisito para los electores el poseer propiedades. Para ser ciudadano se requería tener propiedades con un valor al menos de cien pesos. Los candidatos a senadores debían poseer bienes raíces con un valor no menor de dos mil pesos. Asimismo, para poder ser electo presidente de la república había que contar con propiedades en bienes raíces por un valor no menor de cuatro mil pesos.

Durante el período de los Treinta Años se da un proceso de constantes elecciones celebradas cada cuatro años, siendo una época que, a pesar de ser calificada "de paz" por la ausencia de guerras, se caracteriza por la presencia de la lucha de clases. Precisamente, durante la presidencia de Joaquín Zavala los jesuitas son expulsados de Nicaragua y uno de los fundamentos en que se basa la justificación de su expulsión es acusarlos de levantar a los indígenas de Matagalpa e incitarlos a la rebelión.

Con el triunfo de la Revolución Liberal de 1893, se produce un cambio estructural en el proceso

electoral. En primer lugar, se establece el sufragio directo y secreto; en segundo lugar, se otorga fuerza de ley constitucional a la ley electoral; en tercer lugar, se establece el sufragio como una obligación y un derecho del ciudadano; y en cuarto lugar, se eliminan los requisitos económicos tanto para el elector como para el candidato, señalándose como único requisito necesario la edad, que se fija en dieciocho años sin ninguna restricción y en dieciseis para los que sean casados o sepan leer y escribir. Para los candidatos se establece el requisito de pertenecer al estado seglar y ser nombrado por el pueblo.

Con la caída de Zelaya y su gobierno (1909), se estipula nuevamente el voto público y se eleva la edad de los votantes a los veintiún años y a dieciocho para los que sepan leer y escribir o sean casados. En cumplimiento de los pactos Dawson, se celebran elecciones para conformar la asamblea constituyente, la que fue integrada en su totalidad por miembros del Partido Conservador. Posteriormente, esta asamblea que está elaborando una nueva constitución es disuelta al no cumplir con el mandato del pueblo. Se convoca así a una nueva asamblea constituyente, que será la que apruebe la Constitución de 1911, y se celebran las elecciones presidenciales. Los firmantes de los pactos Dawson se reúnen con el embajador norteamericano para decidir quien va a ser el candidato por el Partido Conservador. En esta ocasión y por sugerencia del embajador norteamericano se designa a Adolfo Díaz, quien asume la presidencia.

Durante esta época se celebran varias elecciones que se caracterizan por la consulta previa con el embajador norteamericano sobre el grado de aceptación del candidato por parte del Departamento de Estado norteamericano. Si éste daba su consentimiento se lanzaba al candidato para las elecciones.

En 1923, se promulga la ley electoral conocida como ley Dodds. Con ella se crea por primera vez un Consejo Nacional de Elecciones, formado por tres miembros, dos de ellos representantes de los partidos tradicionales (Partido Liberal y Parti-

do Conservador) y un tercer miembro nombrado por la Corte Suprema de Justicia en calidad de presidente. En este momento, también se crean los Consejos Departamentales de elecciones —uno por cada departamento—, así como los directorios electorales, centros donde se depositan los votos.

Al firmarse el pacto del Espino Negro (1927), se establece entre otras cosas la supervigilancia en las elecciones, lo que trae como consecuencia la elección del general Frank McCoy como Presidente del Consejo Nacional de Elecciones por parte de la Corte Suprema de Justicia cumpliendo instrucciones del Departamento de Estado norteamericano. Este consejo declaró electo presidente a José María Moncada.

A lo largo de nuestra historia se dio otra elección supervisada. Esta vez le correspondió al almirante Woodward la presidencia del Consejo Nacional, y se mantuvieron en cada uno de los directorios electorales a soldados de la marina norteamericana. En esta ocasión, se declara presidente electo al Dr. Juan Bautista Sacasa, quien es depuesto por un golpe de estado encabezado por Anastasio Somoza García. En este orden, fueron significativas las elecciones que llevaron a la presidencia al Dr. Fernando Argüello quien llegó a ella gracias al fraude electoral. Durante estas elecciones, los camiones de la guardia nacional recogieron las urnas de los diferentes directorios electorales y las llevaron a los sótanos del Palacio Nacional. Varios días después, el Consejo Nacional de Elecciones anunció el resultado del escrutinio, otorgándole la presidencia al Dr. Argüello, quien tan sólo duró vein-

tiseis días en el poder, siendo destituido por el golpe de estado que propició Somoza García.

A partir de 1950, se institucionaliza el sistema de las mayorías congeladas, impidiéndose de esta manera que se diera un ejercicio verdadero de un proceso electoral. Ello ocasiona que se produzcan contiendas electorales a lo interno de los partidos tradicionales. En la Constitución de 1950 se garantiza la representación de minorías en un tercio y en la de 1974 dicha representación se asegura en un cuarenta por ciento. El Partido Liberal lucha por quedar en los primeros sesenta lugares de la lista electoral y el Partido Conservador trata de obtener los primeros cuarenta lugares. Ello se dio así, porque conforme a esa disposición constitucional de la representación de minorías, era suficiente que el Partido Conservador ocupara los cuarenta primeros lugares y el Liberal los sesenta primeros para ser electos, sin importar el número de votos que cada lista obtuviera.

Para finalizar, es necesario señalar que en toda la historia constitucional de Nicaragua, desde la conformación del Estado Federado de Nicaragua hasta la Constitución de 1974, estaba estipulado el principio de no reelección. Con el triunfo de la Revolución Popular Sandinista y mediante el Estatuto Fundamental queda derogada la Constitución de 1974. En la Ley Electoral vigente no se menciona nada sobre el principio de la no reelección, lo cual, a mi juicio, es un tema de reflexión interesante que en este trabajo queda planteado a manera de interrogante.